

1992: ¿Transición o protofenómenos?

Katlyn Sabá
*Asesora del Departamento
de Estudios del Gabinete de
la Presidencia del Gobierno.
Master en Relaciones
Internacionales por la John
Hopkins University.*

En 1992, la sociedad internacional prosiguió la búsqueda de un nuevo concierto, nuevos equilibrios y nuevas reglas que reflejen la realidad de un mundo que es hoy muy distinto. Podemos estar viviendo una transición internacional. Pero también puede tratarse de una nueva era caracterizada, justamente, por la inestabilidad, la acumulación de problemas, conflictos y tragedias y el planteamiento de soluciones parciales. ¿Constituyen los acontecimientos de 1992 lo que Unamuno llamó protofenómenos, es decir, anunciadores de futuro? Lo cierto es que las expectativas abiertas tras el fin de la Guerra Fría se han visto ensombrecidas por el resurgimiento, en expresión acertada de Octavio Paz, de viejos problemas que requieren nuevas soluciones. El panorama internacional está dominado por tendencias contrapuestas de integración y fragmentación. En Europa, mientras una parte del continente avanza, no sin sobresalto, hacia la Unión Europea, en la otra parte, la oriental, se ha desatado una carrera de desintegración que se ha extendido desde la ex Yugoslavia y la ex URSS a Europa Central. El 1 de enero de 1993, Checoslovaquia dejó de existir. Las cuestiones nacionales, los conflictos étnicos y religiosos y el problema de las minorías son algunas de las piezas que conforman el complejo mosaico de la Europa ex comunista. A ello hay que añadir la difícil situación económica en que se encuentran tanto los viejos como los nuevos Estados en su transición hacia economías de mercado.

En otras partes del mundo, el fin del enfrentamiento Este/Oeste prometía tiempos mejores. Los procesos de paz que finalmente lograban ponerse en marcha (Camboya, Angola, El Salvador), de la mano de una Organización de las Naciones Unidas (ONU) revitalizada, empezaron a dar señales inquietantes. La paralización e incluso interrupción violenta de algunos de estos procesos—como en el caso de Angola—ponen en cuestión la propia credibilidad y efectividad de la ONU. La situación en la antigua Yugoslavia y Somalia son a su vez otros dos ejemplos que obligan a reflexionar sobre la necesidad de dotar a la Comunidad Internacional de instrumentos eficaces que le permitan llevar a cabo las tareas que le son encomendadas.

En Oriente Medio la paz sigue siendo una oportunidad. El proceso de paz iniciado en Madrid sigue en marcha, lo que de por sí es una señal positiva aunque el balance de resultados concretos es, sin duda, deficitario. El diálogo en torno a la mesa negociadora no ha conseguido, sin embargo, detener los enfrentamientos que se suceden en el sur del Líbano. Ni tampoco evitar la espiral de violencia-represión desatada a finales del pasado año. ¿Se marchitará esta oportunidad para la paz?

1992 ha sido también el año del cambio en América. En los EEUU se votó a favor de la renovación y en el continente

se daban los primeros pasos hacia la integración. La creación de un área de libre comercio entre los EEUU, Canadá y México puede marcar un cambio fundamental en las relaciones entre los países de ese continente que empiezan a apostar en favor de la cooperación. En otros países, sin embargo, las tentaciones golpistas volvían a hacer acto de presencia.

Crisis, tanto en la esfera política como en la económica, incertidumbre e inestabilidad han sido algunos de los ingredientes del panorama mundial de este último año. La combinación de todos estos factores han generado lo que Alexander King y Bertrand Schneider definen como «malestar humano». «El malestar actual está afectando a las sociedades y a los individuos, perdidos en su brutal ruptura con el pasado, sin ninguna visión nueva y coherente del futuro» (King y Schneider, 1992). Pero quizás este malestar sirva para iniciar un nuevo ciclo en la vida internacional.

Analizar los conflictos, problemas y tragedias de este último año no ha sido una tarea fácil. ¿Cómo ordenar los conflictos? ¿qué criterios aplicar para sistematizar el análisis? La respuesta la encontramos

en la propia dinámica internacional en la que la ONU marca la pauta. Su papel protagonista en determinados conflictos (Camboya, Angola, El Salvador, Irak, etc.), su presencia testimonial en otros (Oriente Medio) y su condición de observador, como en el caso del nuevo frente europeo, han sido la opción elegida para ordenar la realidad conflictiva de 1992.

“¿Constituyen los acontecimientos de 1992 lo que Unamuno llamó profenómenos, anunciaciones de futuro?”

Los cascos azules en acción

1992 se inauguró con acontecimientos esperanzadores. En diversos puntos del mundo se ponían en marcha procesos de paz que, bajo el patrocinio de la ONU, venían a poner fin a sangrientas guerras civiles: Camboya, Angola y El Salvador.

Una difícil transición en Camboya

La operación de mantenimiento de la paz más ambiciosa emprendida por la ONU el pasado año fue la de Camboya. La UNTAC (Autoridad de Transición de la ONU para Camboya) fue aprobada por el Consejo de Seguridad en febrero de 1992 e inició su despliegue a partir del 15 de marzo. Entre las misiones inicialmente asignadas a los *cascos azules* de

UNTAC figuraban la de repatriar a 375.000 refugiados, desarmar a 450.000 soldados y milicias de las distintas facciones enfrentadas, velar por el respeto de los Derechos Humanos, establecer un sistema electoral y supervisar la celebración de elecciones que, en principio, deberán celebrarse en el mes de mayo de 1993. Para ello la UNTAC ha contado con una fuerza de unos 20.000 hombres entre personal civil y militar (14.300 militares que podrían alcanzar la cifra de 15.900). Pero si en un primer momento el factor económico parecía ser el gran obstáculo para llevar a cabo esta operación, con un coste aproximado de 2.000 millones de dólares, a lo largo del pasado año nuevos problemas vinieron a ensombrecer las perspectivas de paz en este país. La actitud de los *jmers rojos* (reiteradas violaciones del cese el fuego, ataques contra helicópteros y personal de la ONU, actos de sabotaje, etc.) y su negativa a participar en el proceso de desarme, bloqueando la aplicación de los acuerdos de paz suscritos en París en 1991, exigieron una nueva intervención del Consejo de Seguridad. Así la Resolución 792 del 30 de noviembre contempla la imposición de sanciones económicas (prohibición de suministrar productos petrolíferos y de exportar madera y piedras preciosas, actividades que reportan a los *jmers rojos* importantes beneficios, calculados en torno a 300 millones de dólares al año), sanciones limitadas al territorio donde operan los *jmers rojos*, en la zona fronteriza con Tailandia. Pero esta decisión puede quedar reducida a una simple medida de fuerza *testimonial* contra los infractores. La actitud de China, que se abstuvo, y la de Tailandia, que en cierta medida se ha beneficiado del comercio interfronterizo, plantean serias dudas sobre la efectividad de estas sanciones. La ONU no obstante se mantiene firme en su propósito de hacer avanzar el proceso de paz en Camboya, incluso a costa de marginar al recién bautizado Partido de la Unidad Nacional de Camboya (los *jmers rojos*) del proceso electoral. Pero ¿es posible la pacificación y democratización de Camboya sin la participación de los *jmers rojos* que controlan alrededor del 14% del territorio? ¿Puede la ONU permanecer impassible ante el desafío? Lo que está en juego en Camboya no es sólo el proceso de paz sino la propia credibilidad de la ONU.

Angola entre la paz y la guerra

Pero no sólo en Camboya, también en Angola el proceso de paz se vió trágicamente interrumpido. Las elecciones generales y presidenciales, celebradas en

septiembre de 1992 bajo el control de la ONU, dieron la victoria al partido del presidente Dos Santos, Movimiento Popular para la Liberación de Angola (MPLA). Esta victoria, sin embargo, no fue aceptada por los partidarios de la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA) que lidera Jonas Savimbi. Su negativa a aceptar los resultados de estas elecciones provocó violentos enfrentamientos entre los seguidores de la UNITA y las fuerzas gubernamentales, poniendo al país nuevamente al borde de la guerra civil. Las llamadas de la ONU en favor de un alto el fuego y de la reanudación del diálogo lograron un primer acuerdo de cese del fuego entre el Gobierno y UNITA, el 26 de noviembre, así como el compromiso de ambas partes de respetar la integridad de los Acuerdos de Paz de Bicesse. Al mismo tiempo se solicitaba la prórroga de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas para Angola (UNAVEM II, Misión de Verificación de la ONU para Angola) que en principio debía expirar a finales de noviembre del pasado año. Este acuerdo abrió perspectivas esperanzadoras que pronto se vieron frustradas por la intensificación de los combates en todo el país. A la propuesta del presidente Dos Santos de proceder a la formación de un Gobierno de reconciliación nacional que permita concluir el proceso electoral (la segunda vuelta de las elecciones presidenciales), la UNITA respondió con las armas. La opción del diálogo, no obstante, permanece abierta y las presiones se centran en Jonás Savimbi a fin de que asuma los compromisos adquiridos. El éxito o fracaso del proceso de paz en Angola tendrá importantes consecuencias tanto a nivel regional (Mozambique está embarcada en un proceso similar) como en todo el continente africano en el que la ONU tiene aún mucho por hacer (Somalia, Liberia, etc.).

El Salvador apuesta por la reconciliación

En El Salvador, por el contrario, prevaleció la voluntad de proseguir el proceso de reconciliación y reconstrucción nacional. Los acuerdos suscritos, bajo los auspicios de la ONU, entre el Gobierno salvadoreño y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) pusieron en marcha el proceso de paz cuya supervisión fue encargada a la Comisión de Verificación y Control de la ONU en El Salvador (ONUSAL). La desmovilización y desmilitarización de la guerrilla así como la reducción y reestructuración de las Fuerzas Armadas, particularmente la depuración de la cúpula militar, constituyen el núcleo central de este proceso, que deberá concluir con

la celebración de elecciones generales en 1994. En un principio, las reticencias del Gobierno salvadoreño a proceder con la reforma del ejército y, en concreto, a iniciar la depuración de los jefes y oficiales implicados en la *guerra sucia*, amenazó con paralizar el proceso de desmovilización del FMLN (de enero a octubre del pasado año, el FMLN desmovilizó y desarmó al 60% de sus hombres bajo la supervisión de la ONU). Superadas las vacilaciones, el Gobierno salvadoreño elaboró finalmente un plan de depuración de las Fuerzas Armadas que obtuvo en principio el beneplácito de la ONU y del FMLN, desbloqueándose así el proceso. La disolución del tristemente famoso batallón de Atlacatl fue el primer paso. Aunque queda mucho camino por recorrer, la paz en El Salvador, pues, parece ya un hecho. El 15 de diciembre el Gobierno y el FMLN, ahora reconvertido en fuerza política, sellaron el fin de la guerra y el comienzo de la transición democrática. Se abre así una nueva etapa en la historia de El Salvador, etapa en la que la ONU seguirá presente al haberse ampliado el mandato de ONUSAL.

Las Naciones Unidas también han intervenido en conflictos abiertos, la guerra en la antigua Yugoslavia y en Somalia, aunque en ambos casos los *cascos azules* han desempeñado labores humanitarias ante la imposibilidad de poner en marcha procesos de paz. Pero es precisamente en el ámbito de las operaciones humanitarias donde la ONU ha sentado un precedente importante de cara al futuro al autorizar, como en el caso de Somalia, el despliegue de una fuerza multinacional.

La tragedia de los Balcanes

En la ex Yugoslavia la ONU ha adoptado diversas medidas: embargo, bloqueo naval, establecimiento de una zona de exclusión aérea sobre territorio bosnio, e incluso, suspensión de la nueva Federación Yugoslava (compuesta de Serbia y Montenegro) como miembro de la ONU. A pesar de estas medidas la guerra prosigue y, lo que es peor, la *limpieza étnica* está prácticamente ultimada en Bosnia-Herzegovina. En marzo de 1992, ante los infructuosos intentos por parte de la Comunidad Europea (CE) y de la ONU por detener la guerra, se crea la Fuerza de Protección de la ONU para Yugoslavia (UNPROFOR). Esta fuerza, integrada inicialmente por unos 15.800 hombres y que a finales del año pasado ya contaba con cerca de 24.000 entre militares, fuerzas de policía y civiles, ha desempeñado diversas funciones. Tras decretarse el cese del fuego en Croacia, los *cascos azules* se encargaron de la vigilan-

cia de tres áreas denominadas «Áreas de Protección de la ONU» situadas en territorio croata, al objeto de supervisar el proceso de desmilitarización de dichas zonas –retirada y desmovilización de todas las fuerzas armadas– y velar por la seguridad de los civiles. Fuera de estas zonas los observadores militares de la UNPROFOR han verificado la retirada del ejército yugoslavo y de las fuerzas serbias de Croacia. En Bosnia-Herzegovina la tragedia humana llevó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a aprobar el 14 de septiembre la Resolución 776 que, atendiendo a las llamadas hechas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), permitió el despliegue de fuerzas de la UNPROFOR en Bosnia y la ampliación del número de efectivos a cerca de 6.000 hombres. La misión de los *cascos azules* en territorio bosnio ha sido muy distinta. No se trata de imponer la paz sino de evitar mayores sufrimientos a la población civil, expuesta a la guerra y al frío, mediante la protección de los convoyes de ayuda humanitaria. Una tarea nada fácil, dado el frágil estatuto de la ONU en esta guerra.

Las constantes violaciones de las resoluciones de la ONU, denunciadas entre otros por el Secretario General de Naciones Unidas y por los presidentes de la Conferencia de Paz sobre Yugoslavia, obligó al Consejo de Seguridad a salir de su actitud de pasividad y endurecer su posición en este conflicto. Descartando cualquier intervención militar, como pedían los países integrantes de la Organización de la Conferencia Islámica así

“Todas las advertencias dirigidas contra Serbia no surtieron efecto: algunos países empezaron a defender medidas de fuerza”

como los dirigentes de Bosnia, la Resolución 787 del 16 de noviembre acordó establecer un bloqueo naval similar al impuesto sobre Irak en 1990. Autorizó asimismo el empleo de todos los medios necesarios, incluido en su caso el empleo de la fuerza, para hacer respetar las resoluciones de la ONU y, en particular, el embargo (que también rige en territorio bosnio a pesar de las presiones en favor de levantar el embargo de armas a esta república). Se reiteraba igualmente la condena de las violaciones del derecho humanitario y específicamente la práctica de la depuración étnica. Sólo en Sarajevo han muerto ya más de 11.000 personas y determinadas fuentes aseguran que la guerra en Bosnia se ha cobrado cerca de 128.000 vidas (*El País*, 10.12.92). Ante esta situación, la Comisión de Derechos Huma-

nos de la ONU aprobó en Ginebra una resolución en la que se acusaba a los rebeldes serbios en Bosnia de ser los máximos responsables de las atrocidades de la guerra y se pedía a la Comunidad Internacional un pronunciamiento sobre la posibilidad de considerar estos como un genocidio. En similares términos se pronunciaba la Conferencia de Paz que, en diciembre, acordaba la necesidad de establecer un tribunal internacional similar al de Nuremberg para juzgar a los responsables de los crímenes de guerra. Al tiempo se daban a conocer nuevos datos escalofriantes: las violaciones masivas. Miles de mujeres y niñas, principalmente bosnias musulmanas, han sido violadas: las primeras averiguaciones oficiales señalan más de 20.000 víctimas. Ante esta nueva evidencia, el Consejo de Seguridad aprobaba por unanimidad, el 18 de diciembre, una nueva resolución (798) que condenaba estos hechos y exigía la clausura inmediata de todos los campos de detención en Bosnia-Herzegovina (que, según algunas fuentes, albergan a cerca de 70.000 prisioneros) instando asimismo al Secretario General de la ONU para que facilitase la labor de la delegación de la CE encargada de investigar las violaciones masivas.

Junto a estas condenas, el temor de que Belgrado pueda iniciar la *limpieza étnica* en Kosovo con graves consecuencias para Macedonia, y en general para toda la región balcánica, llevó al Secretario General de la ONU, Butros Ghali, a proponer el envío de *cascos azules* a Macedonia. Esta iniciativa contó con el apoyo unánime del Consejo de Seguridad que, consciente del riesgo cada vez mayor de una eventual extensión e internacionalización del conflicto, acordó el 11 de diciembre el despliegue de 700 *cascos azules* en la República de Macedonia. Este nuevo despliegue de carácter preventivo tiene por objeto evitar una escalada de la violencia en territorio macedonio –en el que coexisten minorías procedentes de otros países fronterizos como Albania, Grecia, Bulgaria y Serbia– y vigilar las fronteras de esta república con la nueva Yugoslavia y Albania. Mientras tanto la autoproclamada República Independiente de Macedonia sigue a la espera de ser reconocida internacionalmente. Razones político-semánticas (Grecia se opone al uso del nombre de Macedonia) han sido las culpables de este retraso.

Todas las advertencias y amenazas dirigidas contra Serbia no parecían surtir gran efecto. De ahí que mientras algunos países seguían abogando en favor de una salida negociada, otros, con los EEUU a la cabeza, empezaron a defender la adopción de

medidas de fuerza. El Secretario de Estado de los EEUU, Lawrence Eagleberger, manifestaba en este sentido a mediados del pasado mes de diciembre que «ha llegado la hora de métodos más agresivos». La última palabra la tiene la ONU. En previsión, la OTAN estudiaba a finales del pasado año su eventual participación en la antigua Yugoslavia.

¿Somalia recuperará la esperanza?

En Somalia la situación es, si cabe, aún más dramática. Con el derrocamiento de Said Barre en 1991, este país se sumió en una guerra tribal que enfrenta no ya a etnias diferentes sino a partidarios de un mismo clan en una lucha despiadada por el poder. La guerra, el terror impuesto por las bandas armadas de los llamados *señores de la guerra* y el hambre han sido las dramáticas realidades de este país en 1992. Según datos de la ONU, la guerra civil y el hambre se han cobrado ya 300.000 vidas (alrededor de 1.000 personas mueren cada día). En enero de 1992 el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó una primera resolución en la que se establecía un embargo de material militar. Posteriormente, en abril, se puso en marcha la UNOSOM (Operación de la ONU para Somalia) a fin de proteger la distribución de la ayuda humanitaria que llegaba al país pero no a sus destinatarios. El primer envío de 500 *cascos azules* sólo sirvió para constatar el fracaso de esta operación y la imposibilidad de completar el despliegue inicialmente previsto de otros 3.000 hombres. La inseguridad, el chantaje y las rivalidades entre clanes imposibilitaban la labor de las organizaciones humanitarias que intentaban ayudar a Somalia, aumentando la sensación de impotencia de la ONU.

El drama de este país y la repercusión que ha tenido a nivel de la opinión pública mundial llevó a la ONU a adoptar una resolución sin precedentes. El 3 de diciembre, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobaba por unanimidad una resolución autorizando una intervención militar en Somalia a fin de garantizar el suministro de ayuda humanitaria a la población. Se trata del primer caso en que el *deber de injerencia* por motivos humanitarios ha prevalecido sobre el principio de no injerencia. La operación *Devolver la Esperanza*, capitaneada por los EEUU, tiene previsto desplegar una fuerza multinacional integrada por cerca de 36.000 hombres de los que más de 30.000 son soldados estadounidenses. Uno de los efectos imprevistos de esta operación fue un primer acuerdo de paz firmado entre dos de los más destacados *señores de la guerra*, Mohamed Alí Mahdi

y Mohamed Farah Aidid, nada más ponerse en marcha esta iniciativa, lo que podía facilitar la tarea de la fuerza multinacional. Una tarea no suficientemente precisada en la resolución de la ONU. Para los EEUU el objetivo a cumplir por la fuerza multinacional, es decir, garantizar las condiciones de seguridad necesarias para la distribución de la ayuda humanitaria, no implicaba necesariamente el desarme y desmovilización de las facciones enfrentadas, tarea que según el Secretario General de la ONU era imprescindible para garantizar la seguridad. Estas diferencias se fueron limando. En cualquier caso, una vez concluida esta intervención la fuerza multinacional dará nuevamente el relevo a los *cascos azules* de la ONU. Contribuir a la reconstrucción del tejido político y social de Somalia será la difícil misión que deberá desempeñar la ONU en esta segunda fase.

El despliegue de *cascos azules* en el mundo sigue creciendo. Mozambique será el nuevo destino de los 8.000 *cascos azules* integrantes de la Operación de las Naciones Unidas para Mozambique (ONUMOZ), aprobada por unanimidad por el Consejo de Seguridad el 16 de diciembre pasado. Su misión será la de garantizar el proceso de paz acordado, en Roma en octubre de ese mismo año, entre el Gobierno de Joaquín Chissano y la guerrilla de la Resistencia Nacional de Mozambique (RENAMO). En otros conflictos, sin embargo, los *cascos azules* de la ONU siguen a la espera de poder desempeñar sus tareas. Esta es la situación de los 343 hombres integrantes de la Misión de la ONU para el Referéndum del Sahara Occidental (MINURSO), establecida en abril de 1991.

Irak: el forcejeo de la posguerra

Cuando han transcurrido más de veinte meses desde el fin de la guerra del Golfo, Irak sigue estando en el punto de mira de la ONU. La Resolución 687 del Consejo de Seguridad de abril de 1991, en la que se fijaban las condiciones del cese del fuego definitivo, sigue en vigor a la espera de que Bagdad cumpla con los compromisos asumidos. Así lo confirmaba la decisión del Consejo de Seguridad que el pasado mes de noviembre rechazaba de forma unánime la petición formulada por Bagdad de levantar el embargo económico que sigue pesando sobre este país. Las razones para esta negativa son muchas. Quizá las más significativas son el rechazo de Irak a aceptar el control de la ONU a largo plazo sobre su industria armamentística, la constante represión ejercida contra kurdos y shiitas y su no renuncia a las reivindicaciones territoriales sobre Kuwait.

En la posguerra las relaciones entre la ONU y Sadam Husein han estado dominadas por el forcejeo y los ultimátums. Las primeras chispas saltaron a raíz de la intervención de la misión especial de la ONU, encabezada por el embajador Ekeus, encargada de controlar y supervisar la destrucción de las armas de destrucción masiva en poder de Bagdad. Los inspectores de la ONU y de la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA) tuvieron que sortear innumerables obstáculos ante la negativa del Gobierno iraquí a facilitar información y a proceder a la destrucción de determinados equipos (principalmente misiles Scud). Fue necesaria, en febrero del pasado año, la intervención del Consejo de Seguridad en forma de ultimátum para que Bagdad accediese a cumplir con sus obligaciones.

La tensión, sin embargo, alcanzó su punto más álgido en el mes de julio. La negativa a autorizar la entrada de la misión de la ONU en el Ministerio de Agricultura iraquí, depositario en principio de documentos fundamentales sobre el programa nuclear de Bagdad, atrajo nuevamente vientos de guerra. Los EEUU amenazaron con el uso de la fuerza. Sadam

“La Intifada y la violencia desatada, tanto en los TTOO como en Israel, propiciaron una gran tensión en las negociaciones”

Husein, tras mantener un pulso de tres semanas, finalmente accedió a abrir las puertas del ministerio. Para entonces los documentos habían desaparecido. Pero el desafío de Irak no se limitaba sólo al control de armamentos. Las organizaciones humanitarias, cuyo mandato había expirado el 30 de junio, sufrían el acoso de las autoridades que no deseaban renovarlo, mientras los guardianes de la ONU eran víctimas de incidentes violentos; Sadam Husein llamaba al incumplimiento de las recomendaciones de la ONU, retirando a su representante de la comisión encargada de delimitar las fronteras con Kuwait, y endurecía la represión contra la población shiita al sur del país. Hacia finales de agosto, los EEUU, Francia y el Reino Unido decidían actuar por su cuenta estableciendo una zona de exclusión aérea al sur del paralelo 32 con objeto de proteger a la población shiita. Una medida similar a la adoptada para proteger a la población kurda al norte del paralelo 36. En ambos casos, el Consejo de Seguridad se mantuvo al margen. Como también lo hizo, a finales de diciembre, a raíz del derribo por parte de los EEUU de un avión iraquí que violó el espacio aéreo protegido al sur del paralelo 32. Era

una primera señal de alerta de la determinación de los EEUU, o quizá del hoy ex presidente Bush, de no aceptar nuevos desafíos por parte de Sadam Husein.

Pero si la tensión reinaba al sur de Irak, al norte el problema de los kurdos se complicaba. Al tiempo que los kurdos iraquíes avanzaban en la construcción de un autogobierno, Turquía iniciaba una ofensiva contra los kurdos del PKK (Partido de los Trabajadores del Kurdistan) en sus posiciones al norte de Irak. Ankara seguía con preocupación la iniciativa de crear un Estado Federal del Kurdistan iraquí, proclamado en octubre por la Asamblea Nacional Kurda, lo que podría llevar a la creación de un Estado kurdo independiente que tarde o temprano amenazaría la integridad territorial turca. Su apoyo interesado a los dirigentes kurdos iraquíes, a cambio de su colaboración en la lucha contra la guerrilla del PKK, podría ser reemplazado por un mayor acercamiento hacia Bagdad formando un frente común en su lucha contra un Kurdistan independiente.

Oriente Medio: en clave de diálogo

En el proceso de paz de Oriente Medio, la ONU, por el contrario, ha tenido una intervención limitada a lo largo de 1992. Este papel secundario puede cambiar en el futuro ya que el nuevo Gobierno laborista israelí ha levantado el veto que pesaba sobre la ONU, invitando formalmente a esta organización a participar como miembro de pleno derecho en esta dinámica de paz. A lo largo de 1992 el complejo proceso de paz de Oriente Medio siguió su curso en su doble vertiente de negociaciones bilaterales, en las que sirios, palestinos y jordanos negocian separadamente con los israelíes un plan de paz para la región, y multilaterales, en las que los Estados regionales y extrarregionales abordan aspectos fundamentales para la consecución de una paz estable para la región. Un curso no exento de dificultades y de incógnitas. Los resultados de las elecciones generales celebradas en Israel en el mes de junio despejaron la primera incógnita. La constitución de un Gobierno laborista introdujo una nueva dinámica en el proceso de paz, si bien las excesivas expectativas creadas en torno a la posición negociadora del nuevo Gobierno de Rabin pronto se vieron frustradas ante la ausencia de resultados concretos.

El Gobierno laborista inauguró su mandato con una serie de iniciativas encaminadas a reforzar el talante negociador del nuevo Gobierno frente a la tradicional intransigencia del partido conservador

Likud. La prohibición de nuevos asentamientos en los Territorios Ocupados (TTOO), la liberación de presos palestinos, la propuesta de autogobierno que contempla la creación de un Consejo Ejecutivo con competencias municipales o la aceptación de la resolución 242 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como base de las negociaciones con Siria, no fueron suficientes para producir resultados concretos. Sí valieron para mantener en marcha el diálogo. El segundo factor de incertidumbre que pesó sobre el proceso fue el de las elecciones estadounidenses. Aunque las consecuencias de la elección de Bill Clinton como nuevo presidente de los EEUU sobre el proceso de paz empezarán a notarse a partir de enero de 1993, es indudable que la perspectiva de una Administración demócrata, tradicionalmente más proclive a Israel, introduce interrogantes aún por despejar.

Pero veamos qué ha ocurrido a lo largo de 1992. Quizás un primer aspecto positivo a resaltar es que los problemas de procedimiento, que tantas veces amenazaron con paralizar las primeras rondas de negociaciones, poco a poco han sido relegados a un segundo lugar. Sin embargo, si dichos problemas – discusiones sobre composición de delegaciones, sedes, etc. – no lograron detener la dinámica negociadora, los continuos choques y enfrentamientos en la frontera sur del Líbano estuvieron en muchas ocasiones a punto de provocar la ruptura de las negociaciones bilaterales entre Israel y el Líbano. Además el recrudecimiento de la Intifada y la violencia desatada tanto en los TTOO como en Israel propiciaron un ambiente de gran tensión que necesariamente se reflejó en las mesas de negociación. El balance de este último año de negociaciones se cierra, sin embargo, en clave de crisis. La deportación de 418 palestinos, acusados de pertenecer a la organización integrista *Hamas*, ordenada por el Gobierno de Rabin como represalia por el asesinato de un guardia fronterizo, introduce nuevos factores en esta difícil dinámica de paz. Por lo pronto una nueva condena del Consejo de Seguridad a Israel.

En el ámbito bilateral se celebraron ocho rondas de negociaciones, iniciándose la última el 7 de diciembre de 1992. Las negociaciones bilaterales pivotaron en torno a dos ejes fundamentales: por un lado, el palestino-israelí y, por otro, el sirio-israelí. En cuanto al primero, el modelo de autogobierno sigue enfrentando a palestinos e israelíes. Mientras para Israel cualquier plan de autonomía debe estar basado en la coexistencia y no en la transferencia de poderes y autoridad, para los palestinos el modelo de

autogobierno debe construirse a partir de una base popular, es decir, mediante la celebración de elecciones para formar en los TTOO un «Consejo Ejecutivo» palestino, dotado de poderes legislativos y ejecutivos. La propuesta israelí, que fue rechazada por los palestinos, contemplaba asimismo la división de los TTOO en tres categorías: las zonas donde viven los palestinos quedarían bajo la dirección y administración del Gobierno Autónomo Palestino; los territorios habitados por israelíes quedarían bajo control de Israel y, para las tierras de dominio público, se crearía una Administración mixta. Tampoco existe acuerdo con respecto a los plazos, ya que mientras Israel propone un período de cinco años de autogobierno palestino transitorio, los palestinos plantean que la fase transitoria, antes de llegar a una solución definitiva, se limite a tres años. Pero mientras los desacuerdos persistían en torno a la mesa negociadora, el Gobierno laborista iniciaba un proceso de acercamiento a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP). Una primera señal de este posible acercamiento ha sido el levantamiento por parte del Parlamento israelí, la *Kneset*, de la prohibición de mantener contactos con esta organización. Sin embargo, si la amenaza fundamentalista del Movimiento de Resistencia Islámica, *Hamas*, parecía situar a ambos rivales del mismo lado de la barrera, la deportación de los 418 palestinos, el pasado mes de diciembre, puede alterar el juego de alianzas.

En las negociaciones entre sirios e israelíes, las discusiones a lo largo de las cinco primeras rondas se polarizaron en torno a la interpretación de la Resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU. Para Israel, esta resolución implica la obligación de retirarse de una parte de los TTOO y no de la totalidad, como defiende Siria. Tras las elecciones israelíes, el primer ministro Rabin no tardó mucho en proponer un acuerdo de paz con Siria y una retirada parcial del Golán lo que creó nuevas esperanzas de un rápido avance en la negociación entre Israel y Siria, y algunos temores por parte Palestina. Pronto quedó claro que, mientras Israel insiste en hablar de paz a solas con Damasco, Siria por el contrario sólo estaría dispuesta a alcanzar una paz completa con Israel a cambio de la retirada total de los TTOO, si bien acepta que las negociaciones a distintas bandas progresen a diferente ritmo.

Con Jordania, el diálogo sobre algunas cuestiones (cooperación económica, recursos hidráulicos, energía y medio ambiente) no ha planteado excesivos

problemas como ocurre con las relativas a los refugiados, la definición de TTOO o las cuestiones de seguridad en las que ambas partes siguen manteniendo posiciones divergentes, a la espera de avances entre israelíes y palestinos. El diálogo con Beirut ha sido, sin duda, el más vulnerable. La solución del sur del Líbano dependerá en gran medida de lo que acuerden sirios e israelíes. Mientras tanto las milicias de *Hezbollah* siguen actuando al sur del país y la aviación israelí continúa con sus bombardeos.

La vertiente multilateral de este proceso de paz se inauguró en Moscú en enero de 1992, estableciéndose cinco grupos de trabajo sobre los siguientes temas: seguridad y control de armamentos, refugiados, desarrollo económico y regional, recursos hidráulicos y medio ambiente. Las negociaciones multilaterales se celebran paralelamente a las bilaterales, aunque evidentemente están supeditadas a los avances en estas últimas. De hecho tanto Siria como el Líbano se han negado a participar en los foros multilaterales, alegando los escasos avances en el diálogo directo con Israel. Los problemas de procedimiento también han exigido un cierto consenso respecto al formato

de las reuniones y la participación que ha permitido la celebración de dos rondas negociadoras.

“La ONU necesita también adecuar sus funciones e instrumentos a la nueva realidad internacional, a las nuevas amenazas”

En suma, el camino recorrido hasta ahora en el proceso de paz en Oriente Medio puede ser analizado desde una doble perspectiva. Para los más optimistas, la continuación del diálogo es de por sí una señal positiva. Ninguna de las partes interesadas parecen estar ahora dispuestas a correr con la responsabilidad de entorpecer la dinámica de paz. Sobre la mesa de negociaciones se discuten ya propuestas concretas que, si bien reflejan las profundas divergencias que persisten entre israelíes y palestinos sobre el modelo de autogobierno o entre israelíes y sirios sobre paz a cambio de territorios, definen un marco para las futuras negociaciones. El acercamiento de posiciones no será una tarea fácil y exigirá concesiones recíprocas. Mucho dependerá de la actitud de la nueva Administración demócrata de los EEUU y su voluntad de seguir presionando a todas las partes para que el proceso avance. Este será sin duda uno de los retos más difíciles de la nueva política exterior del presidente Clinton: recuperar la confianza de los países árabes y la cordialidad con Israel.

La otra perspectiva es menos alentadora. Tras más de un año de negociaciones, la frustración se ha ido extendiendo principalmente entre los palestinos. El fundamentalismo islámico ha sido el principal beneficiario de esta situación. La creciente influencia de este movimiento en los TTOO, en el Líbano, Jordania y Egipto, por no mencionar a Sudán y Argelia, puede tener consecuencias negativas para el proceso de paz. Por otra parte, mientras en las negociaciones multilaterales se abordan cuestiones de seguridad y de control de armamentos, la dinámica de rearme en Oriente Medio no sólo no se ha detenido sino que el riesgo de la proliferación de armas de destrucción masiva sigue a la orden del día. Las recientes denuncias contra Irán son una primera señal de alerta.

Un mundo más ONU-dependiente

«La Comunidad Internacional se enfrenta a nuevos retos en la búsqueda de la paz en la que las Naciones Unidas jugarán un papel central por lo que los miembros del Consejo de Seguridad fortalecerán y mejorarán la organización para aumentar su eficacia, asumiendo aquéllos plenamente sus responsabilidades en el marco de la Carta de la ONU». Así reza uno de los párrafos de la declaración emitida al término de la cumbre extraordinaria de los jefes de Estado y de Gobierno de los miembros del Consejo de Seguridad celebrada en Nueva York el 31 de enero de 1992. Sin embargo, mientras el mundo se encuentra inmerso en una dinámica de cambio, la transformación interna de la ONU se hace esperar. Japón y Alemania siguen en la lista de espera de los aspirantes a ocupar un puesto permanente en el Consejo de Seguridad, junto con otros países representativos de otras realidades de la Comunidad Internacional de los 90. La nueva situación geopolítica y geoestratégica del mundo de hoy –la ONU ya cuenta con 179 miembros– exige un proceso de renovación de las estructuras creadas para hacer frente a una dinámica internacional profundamente transformada.

Pero para afrontar el nuevo panorama mundial, la ONU necesita también adecuar sus funciones e instrumentos a la nueva realidad internacional, en la que las amenazas o riesgos no son ya exclusivamente de naturaleza militar sino también económica, social, humanitaria y ecológica. La diplomacia preventiva, el restablecimiento o la imposición de la paz, el mantenimiento y la consolidación de la misma, son las funciones esenciales que deberá desarrollar la

ONU en el futuro, según el informe *Un programa para la paz* presentado por el nuevo Secretario General, Butros Ghali, en el mes de julio. La llamada «diplomacia preventiva», es decir, evitar que las controversias puedan desembocar en conflictos armados, no es otra cosa que actualizar una de las funciones básicas por las que se creó esta organización y que hoy adquiere plena actualidad ante el resurgimiento de conflictos clásicos (fronteras, minorías). Para llevarlo a la práctica, el Secretario General propone la creación de un «dispositivo de alerta» que permita la detección de amenazas contra la paz (de origen político, étnico, cultural o socioeconómico) y un despliegue preventivo en caso de necesidad y siempre que lo soliciten la parte o partes en conflicto.

Más problemática resulta la propuesta sobre los medios necesarios para desempeñar las tareas de «restablecimiento o imposición de la paz» que contempla la constitución, sobre la base del artículo 43 de la Carta de la ONU, de unas fuerzas armadas que, con carácter permanente, estén a disposición del Consejo de Seguridad, la activación del Comité de Estado Mayor así como la creación de «unidades de preservación de la paz». Estas últimas unidades, que tendrían carácter provisional y no permanente, desempeñarían misiones de intervención rápida bajo el mandato del Secretario General. Aunque los EEUU tienen interés en una ONU fuerte, queda por ver si estarían dispuestos a aceptar que esta organización actúe por su cuenta y, más aún, que pueda disponer de tropas propias. La intervención militar en Somalia no indica, por ahora, un cambio en la actitud estadounidense. En cuanto a las operaciones de mantenimiento y consolidación de la paz que, como en el caso de Camboya, abarca campos tan diversos como el seguimiento de elecciones, la supervisión del respeto de los Derechos Humanos, la repatriación de refugiados y el proceso de desmovilización y desarme, no plantea sólo problemas de orden político sino también económico.

En 1992 el déficit de la ONU, en el capítulo de operaciones de mantenimiento de la paz, ascendía a 800 millones de dólares. Este déficit refleja la multiplicación de operaciones de esta naturaleza emprendidas por la ONU en los últimos años. Baste recordar que, entre 1948 y 1988, se realizaron trece misiones, mientras que entre 1988 y 1992 se han puesto en marcha catorce operaciones. El presupuesto que necesita Naciones Unidas para cubrir las distintas operaciones que desempeñan los *cascos azules* es de 3.000 millones de dólares (2.000 millones de dólares

aproximadamente cuesta el despliegue en Camboya, 630 millones el de Yugoslavia, 13 millones el del Salvador, etc.). La financiación de estas operaciones corre en la mayor parte de los casos por cuenta de los países participantes (Japón, por ejemplo, se ha comprometido a pagar la mitad de la operación de Camboya). Para paliar este problema de déficit crónico, el Secretario General de la ONU ha avanzado varias propuestas, entre ellas, la creación de un fondo de reserva para las operaciones de mantenimiento de la paz. Pero el mal del déficit se extiende. La lista de morosos de la ONU sigue aumentando. Los EEUU, el mayor contribuyente de esta organización (30.38% del presupuesto total), es el principal deudor pero también lo son Japón y Rusia y todo parece indicar, a la vista de la recesión económica mundial, que otros países seguirán este ejemplo.

Las propuestas del Secretario General vienen a confirmar una tendencia que se ha ido consolidando desde la guerra del Golfo: la ONU es la única fuente de legitimación a la hora de intervenir en un conflicto. Ahora bien, queda por ver cómo se llevan a la práctica las nuevas misiones y en qué medida responderán a los intereses colectivos de la Comunidad Internacional o simplemente de aquellos países con mayor peso e influencia en la escena internacional. Como señalaba recientemente el Secretario General Sr. Butros Ghali «la ONU no se mueve por cuestiones de dinero sino por el poder de sus miembros en sus zonas de influencia».

Pero la ONU, en un mundo revuelto como el de hoy, necesita del apoyo de otras organizaciones regionales que contribuyan al mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. La Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE) tiene, sin duda, un papel decisivo que jugar en el terreno de la prevención de conflictos y gestión de las crisis. Al tiempo que esta organización ha multiplicado sus esfuerzos por lograr el arreglo pacífico de los conflictos surgidos en la Europa postcomunista, y particularmente los derivados de la desintegración del imperio soviético (Georgia, Moldova, etc.), los países miembros de la CSCE daban nuevos pasos, en la Cumbre celebrada en Helsinki en el verano de 1992, para reforzar esta organización.

En Helsinki, la CSCE fue oficialmente bautizada como «organización regional» en virtud del Capítulo VIII de la Carta de la ONU. Esto significa, en teoría, que la CSCE aplicará la diplomacia preventiva en todas sus facetas, desde la prevención de conflictos hasta el mantenimiento de la paz, en un

intento por convertirse así en un complemento necesario de la ONU en Europa. Para desempeñar estas funciones, la CSCE contará con instrumentos propios (Centro de Prevención de Conflictos, creación de un Tribunal de Conciliación y Arbitraje y de un Alto Comisionado para las Minorías Nacionales, etc.) y podrá recurrir, como ya lo ha hecho la ONU, a otras organizaciones para llevar a cabo las tareas de mantenimiento de la paz (OTAN, UEO, CE). En la práctica, sin embargo, uno de los problemas que deberá resolver la CSCE para poder llevar a cabo las nuevas tareas es el de reforzar los mecanismos de toma de decisión. Pero el tiempo apremia. Los conflictos ya se han instalado en Europa.

Europa: un nuevo nudo de conflictos

Desde la caída del muro de Berlín en 1989, es decir, en apenas tres años, en Europa del Este han aparecido 18 nuevos Estados reconocidos internacionalmente: las tres repúblicas bálticas, las once repúblicas integrantes de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) más Georgia; Croacia,

Eslovenia y Bosnia-Herzegovina. La CSCE

ha pasado de 34 a 52 miembros y este

número seguirá creciendo con la

aparición, en enero de 1993, de la

República Checa y de la Repú-

blica de Eslovaquia (Macedonia

y la nueva Federación Yugos-

lavia no han sido reconocidas

internacionalmente). La dis-

gregación se ha instalado en esta

parte del continente, abriendo un

nuevo frente de inestabilidad en Eu-

ropa y en el mundo.

En esta carrera disgregadora, que Ralf Dahrendorf describe como el «retorno a las tribus», intervienen múltiples factores, históricos, económicos, ideológicos, etc. Pero el resultado es que el totalitarismo comunista está cediendo el puesto a otro totalitarismo de signo nacionalista. «Las personas no pueden o no quieren soportar la vida en comunidades heterogéneas; buscan a sus semejantes y a ser posible sólo a éstos» (Dahrendorf, 1992). La ex Yugoslavia es el ejemplo más dramático de la nueva realidad de Europa Oriental, pero no el único. Esta resurrección de sentimientos nacionales está desempolvando problemas heredados del pasado (cuestiones nacionales clásicas como la revisión de fronteras) y sitúa en primer plano el problema de las

minorías étnicas. No hay que olvidar que existen 25 millones de rusos que viven fuera del territorio ruso. En algunos casos, como el de las repúblicas bálticas donde viven algo más de 2 millones de rusos (cerca de tres generaciones), éstos pasaron de ser «ocupantes» a minoría discriminada, mientras en otros, como el caso de Crimea, los rusos son mayoría y reivindican un territorio que fue cedido a Ucrania por Jrushov. Pero también hay más de tres millones de húngaros que viven fuera de su país —de los cuales, 560.000 en Eslovaquia, 450.000 en Serbia (Voivodina) y el resto en Rumania—, 40.000 checos que viven en Eslovaquia y 380.000 eslovacos instalados en tierras checas, así como más de un millón de albaneses en Kosovo. Esta situación se puede complicar aún más con el nuevo problema de refugiados o desplazados que, como consecuencia de los conflictos desatados en Europa oriental, puede alcanzar una cifra de dos a tres millones de personas. Es, sin duda, el problema de refugiados más grave que vive el viejo continente desde la Segunda Guerra Mundial.

En el territorio de la ex URSS, viejos y nuevos conflictos se han sucedido a lo largo de 1992. Uno de los focos de tensión se sitúa en el Cáucaso. El enquistado problema de Nagorni-Karabaj, región situada en Azerbaidzhán pero con población mayoritariamente armenia, sigue enfrentando desde hace cuatro años a las ex repúblicas soviéticas de Armenia y Azerbaidzhán. Este problema de naturaleza territorial (secesionista) tiene sin embargo ramificaciones étnico-religiosas (cristianos armenios contra musulmanes shiitas azeríes) con importantes consecuencias políticas para la región. Los intentos de mediación por parte de Irán y las advertencias turcas ante una posible alianza de Occidente con Armenia son de por sí bastante significativas de las graves repercusiones que podría tener una eventual internacionalización de este conflicto.

Pero, con la desaparición de la URSS, han surgido en el Cáucaso nuevas rebeliones secesionistas que afectan a Georgia y a Rusia. En Georgia coexisten varios conflictos: una guerra civil iniciada tras el golpe de Estado que derrocó al presidente Gamsajurdia en enero de 1992, y los conflictos de Osetia del Sur y Abjasia. En Osetia del Sur (establecida en 1922 como Región Autónoma dentro de Georgia y separada de la República Autónoma de Osetia del Norte creada en territorio ruso en 1924), la supresión del estatuto de autonomía del que había gozado hasta la independencia de Georgia provocó la reacción de los osetios que se declararon indepen-

“El resultado es que el totalitarismo comunista está cediendo el puesto a otro totalitarismo de signo nacionalista”

dientes y reivindicaron la reunificación de las dos Osetias así como su integración en Rusia. Para frenar el enfrentamiento armado entre Osetia del Sur y Georgia fue necesaria la intervención de Rusia. En agosto se logró un acuerdo tripartito que contemplaba el despliegue de fuerzas de interposición rusas, georgianas y osetias en las fronteras de Osetia del Sur con Georgia.

Mientras se lograban detener los combates en esta zona, en Abjasia estallaba la guerra. Esta República Autónoma, situada al noroeste de Georgia, con una población de medio millón de personas, viene proclamando desde hace años su deseo de independencia y reivindicando su incorporación a Rusia. Los enfrentamientos surgieron a raíz del secuestro del Ministro del Interior de Georgia, confinado en Sujumi por los partidarios de Gamsajurdia, ocasión aprovechada por el Gobierno georgiano para ocupar el territorio de Abjasia y poner fin a la rebelión secesionista. Aunque a principios de septiembre se logró un primer acuerdo de alto el fuego auspiciado por el presidente ruso Borís Yeltsin, los enfrentamientos continuaron. Un nuevo acuerdo de alto el fuego se alcanzó entre los representantes de Georgia, Abjasia y Rusia el pasado mes de noviembre.

Al tiempo que Rusia intentaba mediar en los conflictos de Georgia, la tensión se extendía al territorio de la Federación Rusa. La reivindicación de los ingushes sobre el distrito de Prigorodni, situado en Osetia del Norte, obligaba al Gobierno ruso a decretar el estado de emergencia en Ingushetia para detener los enfrentamientos entre ingushes y osetios. Esta reivindicación se remonta a 1944 cuando los ingushes fueron deportados por Stalin y sus tierras pasaron a formar parte de Osetia del Norte. En la vecina Chechenia, que en 1991 autoproclamó su independencia de la Federación Rusa para convertirse en una república musulmana, la tensión con Rusia iba creciendo. La intervención militar rusa en Ingushetia fue la gota que desbordó el vaso de las ya difíciles relaciones entre Rusia y la rebelde Chechenia. Su presidente, Dzhajar Dudáyev, acusó al ejército ruso de ocupar parte de su territorio en la zona fronteriza con Ingushetia, imponiendo la ley marcial en la parte occidental de su república. Un primer acuerdo sobre la delimitación de las fronteras entre Chechenia e Ingushetia, impidió una escalada en este conflicto que enfrenta a Rusia con la rebelde Chechenia y que podría desatar una espiral de violencia en esta región en la que el factor étnico juega un papel importante (muchos pueblos del Cáucaso son musulmanes sunitas).

Chechenia y Tatarstán fueron las dos únicas repúblicas que se negaron a suscribir, el pasado mes de abril, el Tratado de la Federación Rusa. La situación en Tatarstán también representa una fuente de conflictos para Rusia ya que, si bien los tártaros del Volga representan la mayor minoría nacional de Rusia, en esta república conviven un 48% de tártaros y un 41% de rusos. El referéndum celebrado en marzo de 1992, en el que el 61% de los votantes se pronunciaron a favor de la independencia, vino a consagrar la división de Tatarstán en dos comunidades.

Otros brotes secesionistas, como el de la autoproclamada República independiente del Transdniester, franja situada en la orilla oriental del Dniester con una población mayoritariamente rusohablante (60% entre rusos y ucranianos y un 40% de rumanos), también enfrentaron a Rusia con otros países de la CEI, en este caso Moldova. La guerra desatada entre el Gobierno moldavo (apoyado por Rumania) y los rusos del Transdniester (apoyados por el 14 Cuerpo del Ejército ex soviético bajo mando ruso) logró detenerse tras la reunión mantenida por los presidentes de Rusia, Ucrania, Rumania y Moldova, aunque aún no se ha resuelto el estatuto definitivo de este territorio.

Finalmente hay que mencionar la crisis de Tadjikistán que se encuentra a las puertas de una guerra civil que ha ocasionado ya más de 2.000 muertos. En este conflicto se entremezclan cuestiones políticas, étnicas y religiosas. Las fuerzas procomunistas, lideradas por el ex presidente Rajmón Nabíyev, cuentan con el apoyo de la población no tadjika y principalmente la de origen uzbeko que habita la zona norte fronteriza con Uzbekistán y Kirguizia. En cambio, los movimientos islamistas integrantes del Partido del Renacimiento Islámico (PRI), que aspiran a instaurar una república islámica en Tadjikistán, tienen mayor influencia al sur de la república, en la zona fronteriza con Afganistán (en Kuliab y en Kurgán Tiubé).

La rebelión iniciada al sur de Tadjikistán y los enfrentamientos ocurridos en la capital Dushanbé obligaron, en mayo del pasado año, al entonces presidente Nabíyev a integrar en su Gobierno a miembros de las fuerzas islámicas y democráticas de la oposición, formando así un Gobierno de «reconciliación nacional». Sin embargo, los choques entre los partidarios de las distintas corrientes políticas se intensificaron provocando la caída de Nabíyev que se vió obligado a dimitir el 7 de septiembre. La formación de un Gobierno provisional encabezado por

Iskandárov, lejos de estabilizar la situación en el país, provocó mayores enfrentamientos, desplazándose la guerra hasta la capital Dushanbé. Posteriormente, la creación de un Consejo de Estado, en un segundo intento por formar un Gobierno de integración, también fracasó al tiempo que las fuerzas comunistas volvían a retomar el control de una gran parte del territorio.

La ausencia de estructuras políticas y sociales ha sido uno de los factores que han impedido lograr una solución política a la crisis tadhika. En un intento por restablecer el clima de diálogo, el frágil Parlamento tadhiko hizo a finales de noviembre un llamamiento a las partes en conflicto para formar un frente común y poner fin a la guerra civil, al tiempo que decretaba una amnistía general. Pero si la perspectiva de una solución política parece lejana, la solución militar también plantea problemas. La intervención de fuerzas de mantenimiento de la paz de la CEI, defendida por algunas ex repúblicas que invocan el Pacto de Tashkent (pacto de seguridad colectivo firmado el 15 de mayo pero que aún no ha entrado en vigor), no logró materializarse. El Gobierno de Kirguizia también

intentó en solitario el envío de una fuerza de interposición, pero esta iniciativa no contó con el respaldo del Parlamento. En este contexto, la presencia de 10.000 soldados rusos de la División 201 estacionados en Tadhikistán, que hasta la fecha han mantenido una actitud de neutralidad, podría representar una posible vía de solución militar. El Parlamento tadhiko proclamó a la división 201 como

“La disuasión nuclear, por ejemplo, se ha convertido en un arma simbólica. Los problemas ya no se solucionan así”

«fuerza de paz» regulando en un protocolo las misiones a desarrollar por las tropas rusas, siempre respetando su papel neutral. Esta neutralidad, sin embargo, ha sido cuestionada por los grupos anticomunistas que acusan a las tropas rusas de favorecer a los seguidores de Nabíyev.

Los conflictos que han estallado en la ex URSS colocan a Rusia en una posición muy delicada. De un lado se ve obligada a salir en defensa de las minorías-mayorías rusas que habitan fuera de su territorio y que, en muchos casos, se ven acosadas por un nacionalismo de signo antirruso. El presidente Yeltsin ha mantenido una actitud de gran moderación ante estos conflictos a pesar de las presiones ejercidas desde determinados sectores del ejército y por los sectores nacionalistas más radicales. Pero, de otro lado, ha

intentado evitar que las aspiraciones secesionistas que se producen en el seno de la Federación Rusa puedan conducir a su desmembración. De cómo se resuelvan estos conflictos dependerá en gran medida la estabilidad de Europa en los próximos años.

El fin de una Era

Estamos viviendo en definitiva las consecuencias del fin de la Guerra Fría. El orden impuesto por la amenaza nuclear se ha quebrado, produciendo un cierto estallido en la escena internacional. Sin embargo, los conflictos de hoy poco tienen que ver con los de ayer, aunque quizá más con los de anteaer. Al desaparecer el enfrentamiento Este/Oeste se ha producido un cambio en la naturaleza de los conflictos. A los viejos conflictos, como el de Oriente Medio, se han sumado otros nuevos, que también tienen raíces en el pasado, como los que sacuden a la Europa ex comunista. Otros, sin embargo, reflejan la dramática división del mundo entre un norte rico y un sur cada vez más pobre. Surge así una nueva categoría de conflictos de naturaleza socioeconómica con consecuencias devastadoras para la población. Pero el fin del enfrentamiento global también ha tenido efectos positivos. Algunos de los problemas heredados del mundo bipolar se encuentran en vías de solución. Una solución que requiere actuar sobre los problemas de fondo que han emergido a la superficie.

El diagnóstico que presenta la nueva coyuntura mundial exige por tanto adecuar los métodos e instrumentos necesarios para su tratamiento. La disuasión nuclear, por ejemplo, se ha convertido en un arma simbólica. Los problemas del mundo de hoy no se resuelven por la vía nuclear. Más bien todo lo contrario. La proliferación nuclear sigue representando uno de los grandes riesgos para la paz y la estabilidad global, pero los problemas de este fin de siglo tampoco se resuelven *manu militari*. El instrumento militar convencional también tiene sus límites, ya que en determinados casos puede ayudar pero no resolver y, en otros, empeorar o incluso enquistar situaciones.

Hoy la solución de los problemas, si bien exige un tratamiento político-diplomático que favorezca la salida pacífica de las controversias y actúe sobre la raíz de los problemas, no excluye el recurso a instrumentos de acción multilateral, como las operaciones de mantenimiento o incluso de imposición de la paz. En este contexto, la ONU seguirá siendo fuente de legitimidad. Pero la efectividad de su actuación dependerá en gran medida de su capacidad de movilizar

recursos tanto políticos como económicos e incluso militares. Lo mismo cabe decir con respecto a la CSCE. La proliferación de tensiones, conflictos y problemas humanos hoy planteados en el viejo continente representan un difícil reto en esta nueva etapa de su existencia. Las expectativas son grandes. Los resultados están aún por ver.

Referencias bibliográficas

Dahrendorf, R. (1991) «¿Una Europa de las regiones?» *El País*, 10.12.

King, A. y Schneider, B. (1992) *La primera revolución global*. Barcelona: Círculo de Lectores. •